**Diálogo de los Jefes de Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad civil, los Trabajadores, el sector Privado y Otros Actores sociales.**

# SEGMENTO: DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

 **DECLARACIÓN DE LA COALICIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRAVESTIS, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEX DE LAS AMÉRICAS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.**

Cancún, México, 19 de junio de 2017

Señor Secretario General, Señoras Ministras y Señores Ministros, integrantes de las delegaciones oficiales, colegas de la sociedad civil:

Las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersex (LGBTTTI) reunidas en Cancún, del 16 al 18 de junio de 2017 conforme a las directrices establecidas por la Asamblea General de la OEA que determinan un marco normativo para aumentar y fortalecer la participación de la Sociedad Civil en la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas, expresamos que:

Las personas LGBTTTI de la región seguimos sometidas a violencias estructurales de todo tipo, las cuales se manifiestan en el plano de la legislación, la exclusión social y económica, el accionar arbitrario y abusivo de los cuerpos de seguridad del Estado y la persistencia de prejuicios, estigmas y discriminación. Las personas LGBTTTI vemos gravemente vulnerados nuestros derechos de acceso al trabajo, educación, salud, crédito, vivienda, seguridad social, a la justicia y a formar familias y que éstas reciban pleno reconocimiento legal.

La persistencia de prejuicios sobre la orientación sexual e identidad de género diversas impiden una prevención efectiva a las violaciones a los derechos humanos y otros abusos que se perpetran contra la población LGBTTTI. A pesar del creciente número de medidas adoptadas en los países de la región para reconocer nuestros derechos humanos, no se ha avanzado de manera significativa en la mayoría de los Estados en la eliminación de la discriminación y la erradicación de los crímenes por prejuicio.

Las violaciones a los derechos humanos que sufrimos las personas LGBTTTI están marcadas por la impunidad, amparada por la ausencia de un marco legal efectivo que proteja y sancione crímenes por prejuicio. La falta de capacitación de funcionarios/as encargados/as de dirigir las investigaciones, genera que se trasladen sus prejuicios personales a las hipótesis de investigación criminal, desconociéndose la obligación de investigar con debida diligencia. Preocupa además la situación respecto a los crímenes cuya responsabilidad presuntamente recae sobre agentes del Estado, en las que no se observa un avance importante en la investigación, judicialización, sanción, reparación, restitución y garantías de no repetición.

Siguen estando vigentes en diez países del Caribe leyes que criminalizan y prohíben las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Asimismo, algunos países del Caribe prohíben a las personas vestirse con ropas de otro sexo “con fines impropios”, así como el ingreso de extranjeros en razón de su homosexualidad. No hay ninguna duda: todas estas leyes son violatorias de derechos humanos.

Asimismo, la mayoría de los países de la región todavía no cuentan con leyes que reconozcan la identidad de género y que garanticen el acceso a las personas trans, de todas las edades, a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Resulta indispensable promulgar leyes y políticas públicas que respeten y garanticen el derecho humano a la identidad de género, lo cual implica el rechazo categórico de todos los esquemas patologizantes y los requisitos que derivados de ello se imponen sobre las personas trans condicionando de modo inaceptable el acceso al ejercicio del derecho personalísimo a la identidad.

Resulta especialmente preocupante que en muchos casos se excluye de estas discusiones legislativas a niñas, niños y adolescentes, quienes por su edad son mucho más vulnerables a la violencia, corren el riesgo de expulsión de sus hogares, no cuentan con garantías en los centros educativos y no pueden acceder a una adecuada atención de la salud para afirmar su género. Prueba de los efectos letales de la falta de reconocimiento de la identidad de género es que, por ejemplo, en Chile un estudio determinó que el 85% de personas trans que ha intentado quitarse la vida lo ha hecho entre los 11 y los 18 años. Urgen medidas de acción positiva para revertir las condiciones crónicas y sistemáticas de exclusión y estigmatización de las personas trans, entre éstas, resultan especialmente importantes las leyes de cupo laboral para las personas trans.

Los movimientos fundamentalistas religiosos pretenden negar y desconocer nuestros derechos, a través de campañas publicitarias, políticas y jurídicas que promueven una ideología de género de imposición binaria y basada en estereotipos. Resulta de especial preocupación las propuestas legislativas, que como en el caso de Guatemala, pretenden que la libertad de consciencia se convierta en argumento para que se pueda infringir la vida, la integridad y la dignidad de personas y de grupos históricamente discriminados.

En este sentido, se ha promovido una visión del Estado comprometida con manifestaciones e interpretaciones religiosas de los ordenamientos jurídicos, que constituyen una clara afrenta contra el Estado laico como garantía de los derechos humanos de todas las personas, pero de manera especial, de los grupos históricamente discriminados. Iniciativas para establecer modelos únicos y excluyentes de familia basados en concepciones religiosas protegidos por los Estados, así como la patologización, penalización y criminalización de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, representan un retroceso grave para los derechos humanos. En particular, es grave el efecto que los actores religiosos están teniendo en la obstaculización de los programas de educación sexual integral, herramienta que es parte de los derechos sexuales de las y los adolescentes y que es clave para eliminar prejuicios y promover una cultura de respeto y no discriminación.

Por otra parte, nos preocupa además la alta prevalencia del VIH en las Américas. El Caribe, por ejemplo, tiene la segunda tasa de mayor prevalencia del VIH a nivel mundial, una estadística alarmante que tanto la ONU como otras agencias han atribuido en parte a la homofobia y transfobia que aleja a los hombres gays, a otros hombres que tienen sexo con hombres y a personas trans del tratamiento efectivo para la prevención y cuidado del VIH. Este panorama se agrava con las leyes en el hemisferio que penalizan la exposición, la transmisión y el hecho de no revelar el estatus de VIH.

En los últimos años, la criminalización del consumo personal de drogas y las políticas de lucha contra el narcotráfico se han venido aplicando de modo selectivo para criminalizar a nuestras comunidades. Esto afecta de manera desproporcionada a las personas trans y a las trabajadoras y trabajadores sexuales, quienes ya son vulneradas por la aplicación de leyes penales que prohíben las actividades vinculadas al trabajo sexual.

Por otro lado, el endurecimiento de las políticas migratorias y los requisitos de permanencia en los países afectan directamente a nuestras poblaciones, ya que históricamente las personas LGBTTTI han migrado en busca de oportunidades laborales, pero también en busca de espacios sociales menos cargados de discriminación y violencia. América Central y del Norte se enfrentan a la crisis más aguda de personas en movimiento que la región ha presenciado en décadas. Al respecto, es necesario que dichos Estados tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de miles de personas cuyas vidas corren grave peligro, y de las necesidades específicas de protección de grupos tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTTTI y los menores de edad no acompañados.

 Nuestra región ha sido escenario de avances muy importantes en materia de derechos y garantías para las personas LGBTTTI, debido, en parte, al rol de liderazgo asumido por algunos países e instituciones y personas del sistema interamericano. En este sentido, queremos agradecer al Secretario General Luis Almagro por su rol de liderazgo en cuanto al trabajo por el respeto de los derechos de las personas LGBTTTI, tanto a nivel interno de la OEA, como en la región, así como a los países que integran el Grupo de Apoyo LGBTI de la OEA. Su trabajo y compromiso resulta vital para nosotras y nosotros y queremos instar a otros países a sumarse a este grupo de apoyo.

Además, observamos que algunos países trabajan por los derechos de las personas LGBTTTI en la OEA, pero no en la ONU y viceversa. Instamos a estos países que unifiquen sus posiciones y se comprometan con el trabajo por los derechos de las personas LGBTTTI tanto en el ámbito de la OEA como en el de la ONU.

 Agradecemos de manera particular el liderazgo en materia de promoción y protección de nuestros derechos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator para Derechos de Personas LGBTI, Presidente Francisco Eguiguren, a su Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, y al equipo técnico que apoya la Relatoría en la Secretaría. Instamos a la CIDH que continúe su gran labor en esta materia, y que transversalice a través de sus demás Relatorías temáticas la promoción y protección de nuestros derechos. Asimismo, instamos a los países miembros del Grupo de Apoyo LGBTI de la OEA a que refuerce su apoyo al trabajo de la CIDH en esta materia.

El fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, y por consiguiente de las democracias del continente, implica necesariamente que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenten con recursos suficientes y adecuados para que cumplan con sus mandatos. Además, los Estados Miembros de la OEA deben cumplir plenamente con las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano, fortaleciendo los mecanismos de supervisión de cumplimiento, tanto a nivel nacional como interamericano.

***En virtud de lo anterior demandamos,***

***Que los Estados Miembros:***

1. Firmen y ratifiquen la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

1. Adopten legislaciones y políticas públicas conforme a los compromisos asumidos en las resoluciones “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” aprobadas por las anteriores asambleas generales.

1. Creen o fortalezcan las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos e implementen programas educativos que desarrollen una cultura de derechos humanos basada en el principio de igualdad y no discriminación con base en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y diversidad corporal.

1. Adopten medidas que aseguren el acceso a la justicia y garanticen el debido proceso de las personas sin discriminación por orientación sexual e identidad de género.

1. Tomen medidas para investigar, juzgar y sancionar con la debida diligencia a agentes estatales involucrados en violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTTTI.

1. Adopten estrategias de salud integral y específica para poblaciones LGBTTTI, con particular énfasis a las necesidades diferenciadas de las personas trans e intersex.

1. Revisen sus marcos legislativos derogando leyes que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, la utilización de prenda de vestir tradicionalmente asociadas a otro género, y cualquier otra legislación que criminalice y discrimine directa e indirectamente a las personas LGBTTTI.

1. Adopten leyes que reconozcan la identidad de género de las personas trans y leyes que reviertan su exclusión sistemática, como las de cupos laborales para personas trans que se han logrado en distintos países de la región.

1. Promuevan la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles de enseñanza como parte de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

1. Se comprometan con la defensa y promoción del Estado Laico, como una garantía fundamental para el sostenimiento de la Democracia, el Estado de Derecho, y el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTTTI.

1. Deroguen las leyes que penalizan el uso de drogas y analicen modelos apropiados para la legalización y regulación de las sustancias que actualmente son ilegales, como parte de un enfoque de salud pública basado en la evidencia para las políticas de drogas.

1. Deroguen toda ley que penalice no revelar el estatus de VIH, su exposición y transmisión. Asimismo, que los Estados limiten el uso de la ley penal para casos de transmisión intencional del VIH, de acuerdo con las recomendaciones internacionales.

1. Deroguen todas las leyes penales que criminalizan el trabajo sexual, porque ponen en peligro la vida, salud y seguridad de lxs trabajadorxs sexuales y adopten medidas legislativas para garantizar que los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de lxs trabajadorxs sexuales sean respetadas, protegidas y garantizadas.

1. Que los Estados de América Central y del Norte tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad de personas, incluyendo con énfasis en grupos en particular situación de vulnerabilidad, en relación con las violaciones a derechos humanos de personas en movimiento.

1. Que los Estados de la OEA provean de recursos suficientes y adecuados a la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, y que cumplan con las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano.

***Que la Asamblea General:***

* Incluya en su Resolución sobre Derechos Humanos, la sección relativa a Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género y Características Intersex.

***Que la Secretaría General:***

* Redoble los esfuerzos para promover la firma y ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

**Dialogue of Heads of Delegation, the Secretary General, the Deputy Secretary General and the Representatives of Civil Society Organizations, Workers, the Private Sector and Other Social Actors.**

**SEGMENT: HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW**

**DECLARATION OF THE COALITION OF LESBIANS, GAYS, BISEXUALS, TRAVESTIS, TRANSEXUALS, TRANSGENDER AND INTERSEX OF THE AMERICAS BEFORE THE GENERAL ASSEMBLY OF THE OAS.**

Cancun, Mexico, June 19, 2017

Mr. Secretary General, Ministers, Members of the Official Delegations, Colleagues in civil society:

 We, the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, *Travesti* and Intersex (LGBTTTI) organizations convened in Cancun from June 16 to 18, 2017, in accordance with the guidelines established by the General Assembly of the OAS that establish a normative framework to increase and strengthen the participation of civil society in the OAS and the Summits of the Americas process, express that:

 The LGBTTTI people of the region continue to be subjected to structural violence of all kinds, manifested in terms of legislation, social and economic exclusion, arbitrary and abusive action by state security forces and persistent prejudice, stigma and discrimination. The rights of access to work, education, health, credit, housing, social security, justice, and to form families and to receive full legal recognition of LGBTTTI people, are seriously violated.

 The persistence of prejudices about sexual orientation and diverse gender identities, continue to prevent effective prevention of human rights violations and other abuses perpetrated against the LGBTTTI populations. Despite the growing number of measures taken in the countries of the region to recognize our human rights, no significant progress has been made in most States to eliminate discrimination and to eradicate crimes of prejudice.

 The human rights violations suffered by LGBTTTI people are marked by impunity and fostered by the absence of an effective legal framework to protect and punish crimes of prejudice. The lack of training of officials responsible for conducting investigations leads to the introduction of personal prejudices into the hypotheses of criminal investigations and the obligation to investigate with due diligence. There is also concern about the lack of signifcant progress regarding crimes allegedly committed by agents of the State, in which there is no significant progress in the investigation, prosecution, punishment, reparation, restitution and guarantees of non-repetition.

 Laws that criminalize and prohibit same-sex sexual relationships continue to be in force in ten Caribbean countries. In addition, some Caribbean countries prohibit people from dressing up in other clothing generally associated to another gender "for improper purposes", as well as the entry of foreigners because of their homosexuality. There is no doubt: all these laws are human rights violations. In addition, most countries in the region do not yet have laws that recognize gender identity and guarantee access to trans people of all ages to all civil, political, economic, social and cultural rights. It is essential to enact laws and public policies that respect and guarantee the human right to gender identity, which implies the categorical rejection of all pathological schemes and the requirements derived therefrom imposed on people trans to the exercise of the right to gender identity.

 Of particular concern is the fact that in many cases children and adolescents are excluded from these legislative discussions. Because of their age, they are much more vulnerable to violence, are at risk of being expelled from their homes, have no guarantees in schools and cannot access adequate health care to affirm their gender. Evidence of the lethal effects of the lack of recognition of gender identity is that, for example, in Chile a study found that 85% of trans people who have tried to take their own lives have done so between the ages of 11 and 18. Positive action measures are urgently needed to reverse the chronic and systematic conditions of exclusion and stigmatization of trans people, including quota laws, are especially important.

 Religious fundamentalist movements seek to deny and ignore our rights, through advertising, political and legal campaigns that promote a gender ideology of binary imposition and based on stereotypes. Of particular concern are the legislative proposals, which, as in the case of Guatemala, seek to make freedom of conscience an argument so that the life, integrity and dignity of persons and historically discriminated groups can be violated.

 In this sense, a vision of the State has been promoted to manifestations and religious interpretations of the legal systems has been promoted, which constitute a clear affront to the secular state as a guarantee of the human rights of all people, but especially of the historically discriminated groups. Initiatives to establish unique and exclusive models based on state-protected religious conceptions, as well as the pathologization, criminalization and criminalization of various sexual orientations, identities and expressions of gender, represent a serious setback for human rights. Particularly serious is the effect that religious actors are having in hindering comprehensive sexual education programs, a tool that is part of the sexual rights of adolescents and which is key to eliminating prejudices and promoting a culture of respect and of non-discrimination.

 On the other hand, we are also concerned about the high prevalence of HIV in the Americas. The Caribbean, for example, has the second highest HIV prevalence rate in the world, an alarming statistic that both the UN and other agencies have attributed in part to homophobia and transphobia that has alienated gay men, other men who have sex with men and trans people from effective treatment for HIV prevention and care. This scenario is aggravated by laws in the hemisphere that penalize exposure, transmission and failure to disclose HIV status.

 In recent years, the criminalization of personal drug use and policies to combat drug trafficking have been selectively applied to criminalize our communities. This disproportionately affects transgender and sex workers, who have already been violated by the application of criminal laws prohibiting activities related to sex work.

 On the other hand, the hardening of migration policies and the requirements of permanence in the countries directly affect our populations, since LGBTTTI people have historically migrated in search of employment opportunities, but also in search of social spaces less burdened with discrimination and violence. Central and North America are facing the most acute crisis of people in movement that the region has witnessed in decades. In this regard, it is necessary for those States to take immediate measures to ensure the safety of thousands of people whose lives are in serious danger and the specific protection needs of groups such as women, indigenous peoples, LGBTTTI persons and children under unaccompanied children.

 Our region has been the scene of very important advances in terms of rights and guarantees for LGBTTTI people, due, in part, to the leadership role assumed by some countries and institutions and people of the inter-American system. In this regard, we would like to thank Secretary General Luis Almagro for his leadership role in working for the respect of the rights of LGBTTTI people, both within the OAS and in the region, as well as to the countries that are part of the OAS LGBTI Core Group. Your work and commitment is vital to us and we want to encourage other countries to join this Core Group. In addition, we note that some countries are members of the OAS LGBTI Core Group, but not members of the UN LGBTI Core Group and vice versa. We urge these countries to unify their positions and commit to work for the rights of LGBTTTI people both within the OAS and UN.

 We are particularly grateful for the leadership in promoting and protecting our rights by the Inter-American Commission on Human Rights, the LGBTI Rights Rapporteur, President Francisco Eguiguren, its Executive Secretary, Paulo Abrão, and the technical team that Supports the Rapporteurship in the Secretariat. We urge the IACHR to continue its great work in this area, and to make sure our rights are promoted and protected in a cross-cutting manner through the work of other thematic Rapporteurships. We also urge the member countries of the OAS LGBTI Support Group to strengthen their support for the work of the IACHR in this area.

 The strengthening of the Inter-American Human Rights System, and consequently of the democracies of the continent, necessarily implies that both, the Inter-American Commission and Court have sufficient and adequate resources to enable them to fulfill their mandates.

 Further, the Member States of the OAS must fully comply with the decisions of the organs of the Inter-American Human Rights System, thereby strengthening compliance monitoring mechanisms, both at the national and Inter-American levels.

***Due to all this, we demand:***

***To Member States:***

1. Sign and ratify the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance, as well as the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance and the Inter-American Convention Protecting the Human Rights of Older Persons.
2. Adopt legislation and public policies in accordance with commitments already made in the resolutions on “Human Rights, sexual orientations and gender identity” adopted by previous general assemblies.
3. Create or strengthen National Human Rights Institutions and implement educational programs that develop a culture of human rights based on the principle of equality and non-discrimination based on sexual orientation, gender identity and expression, and bodily diversity.
4. Adopt measures that ensure access to justice and ensure due process without discrimination based on sexual orientation and gender identity.
5. Take steps to investigate, prosecute and punish with due diligence all state agents involved in violations of the human rights of LGBTTTI persons.
6. Adopt comprehensive and specific health strategies for LGBTTTI populations, with particular emphasis on the differentiated needs of trans and intersex people.
7. Review your legislative frameworks and repeal laws that criminalize same-sex sexual relationships, the use of clothing traditionally associated with another gender, and any other legislation that criminalizes and directly or indirectly discriminates against LGBTTTI persons.
8. Adopt laws that recognize the gender identity of transgender people and laws that reverse their systematic exclusion, such as those of work quotas for transgender people that are in force in different countries in the region.
9. Promote the implementation of comprehensive sexual education at all levels of education as part of the rights of children and adolescents.
10. Commit themselves to the defense and promotion of the Lay State as a fundamental guarantee for the support of democracy, the rule of law and respect for the human rights of LGBTTTI persons.
11. Repeal laws that criminalize drug use and analyze appropriate models for the legalization and regulation of substances that are currently illegal, as part of an evidence-based public health approach to drug policy.
12. Repeal any law that penalizes not disclosing HIV status, exposure and transmission. In addition, States should limit the use of criminal law to cases of intentional transmission of HIV, in accordance with international recommendations.
13. Repeal all criminal laws that criminalize sex work because they endanger the life, health and safety of sex workers and take legislative measures to ensure that the human rights, safety and dignity of sex workers are respected, protected and guaranteed.
14. That the Central and North American States take immediate measures to ensure the safety of persons, including groups with particular vulnerability, in relation to violations of the human rights of persons who are moving themselves.
15. That the OAS States provide sufficient and adequate resources to the Inter-American Commission and Court of Human Rights and to comply with the decisions of the organs of the inter-American system.

***To the General Assembly:***

* Include in your Resolution on Human Rights the section about sexual orientation, gender identity and expression and intersex traits.

***To the General Secretariat:***

* Redouble efforts to promote the signing and ratification of the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance, as well as the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination, and Related Forms of Intolerance and the Inter-American Convention on the Protection of Human Rights Humans of Older Persons.